

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

MEMORIA DE IDONEIDAD DEL ENCARGO “VALORACIÓN, ANÁLISIS Y APOYO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESIDUOS EN LA EMPRESA”

La ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (deroga la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados), tiene por objeto regular la gestión de los residuos impulsando medidas que prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos.

La Estrategia de Gestión sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid para el período 2017-2024, define la política regional en materia de residuos, estableciendo las medidas necesarias para cumplir con los objetivos fijados por la normativa europea y española. Se Está trabajando ya a nivel estatal en el nuevo Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2023-2035 y en la Comunidad de Madrid en la nueva Estrategia de Economía Circular 2025-2032, que incluirá la Estrategia de Gestión Sostenible de Residuos.

La Estrategia pretende avanzar en la implantación del nuevo modelo de economía circular en la Comunidad de Madrid, definiendo un modelo de gestión de residuos, teniendo en cuenta los aspectos ambientales, sociales y económicos actuales.

Corresponde a la Comunidad de Madrid la autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos, así como la tramitación y resolución de los expedientes administrativos en materia de residuos y de suelos contaminados, y la inscripción de las autorizaciones en el Registro de Producción y Gestión de Residuos.

La normativa sobre residuos es extensa y compleja, y se encuentra en constante cambio con motivo de la adaptación de normas preexistentes a la ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, conllevando generalmente esta adaptación modificaciones en las autorizaciones y habilitaciones previamente otorgadas, circunstancia que ha coincidido con la disminución de las plantillas en la administración pública. Por estas razones, se ha generado una acumulación de expedientes que es necesario resolver para evitar el perjuicio que para los administrados y para la administración implica el retraso en la tramitación, dado que no puede ejercerse la actividad, sin contar con la preceptiva inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos.

El Área de Planificación y Gestión de Residuos, adscrita a la Dirección General de Economía Circular, de acuerdo con el Decreto 237/2021, de 17 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, vivienda y Agricultura, gestiona los expedientes de comunicación previa y de autorización previstos en la Ley 7/2022, de 8 de abril, y aquellos derivados de la normativa de desarrollo de la citada Ley, en relación, entre otras materias, a la minimización y prevención de residuos y a la contaminación de suelos. El otorgamiento de estas autorizaciones implica el análisis y valoración técnica de las actividades y su grado de adaptación a lo establecido en la citada Ley 7/2022, de 8 de abril, y demás normativa sectorial específica en materia de residuos y suelos contaminados.

Estos expedientes, también implican en la mayor parte de los casos, la redacción de informes para otras unidades en materia de inspección, disciplina ambiental, prevención y control integrado de la contaminación o evaluación ambiental.

El encargo se encuadra dentro del marco establecido por la Disposición adicional vigésima cuarta y las disposiciones concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y se realiza por razones de eficacia y por carecer, en la actualidad, de los medios humanos suficientes. Los trabajos a desarrollar requieren conocimientos técnicos y de la legislación con los que técnicos de TRAGSATEC ya cuentan, lo que permite, desde el primer día la ejecución del encargo con eficacia. Experiencias anteriores han puesto de manifiesto la insuficiencia de la contratación ordinaria debido a la falta de estabilidad de las plantillas, que redundan en retrasos y paralización de expedientes. Por otro lado, recurrir a una contratación ordinaria, además de plazos más dilatados (y por tanto el agravamiento de la situación), implicaría la contratación de empresas que actúan en el sector y el adjudicatario tendría que evaluar expedientes de sus propios clientes o de la competencia, generando posible conflictos de intereses, difíciles de detectar por parte de la administración.

La valoración del encargo se ha confeccionado de acuerdo con la Resolución de 13 de abril de 2023, de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión para la determinación de tarifas de TRAGSA, por el que se actualizan las tarifas 2023 aplicables a las actuaciones a realizar por TRAGSA y TRAGSATEC para aquellas entidades respecto de las cuales tenga la consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos.

Madrid, a fecha de firma

LA DIRECTORA GENERAL DE ECONOMÍA CIRCULAR

Firmado digitalmente por: APARICIO MAEZTU CRISTINA
Fecha: 2023.04.20 15:46